

comprobándose que las obras solicitadas no contravienen normativa urbanística alguna. La circunstancia de que estén basadas o amparadas por las obras ordenadas por esta Consejería con el carácter de preventivas, en trámite administrativo no resuelto definitivamente, no puede utilizarse como único criterio para otorgar o denegar dicha licencia. A este respecto, la petición de Licencia podría haberse excedido en relación con las obras ordenadas, y esta Administración no la podría denegar en única consideración de dicho exceso, siempre y cuando no contravenga la normativa urbanística.

Debe añadirse, para más claridad en cuanto a la actuación de esta Consejería, que las medidas preventivas acordadas durante la tramitación de cualquier expediente de Obras o de Ruina, tienen siempre el carácter de mínimos, no estando prohibidos los excesos en su realización siempre y cuando añadan un plus a la seguridad y salubridad del inmueble y no contravengan norma alguna.

Por último, y en cuanto a esta primera alegación del recurrente, debe añadirse que toda licencia de obras se otorga sin perjuicio de terceros, y sin prejuzgar el derecho de propiedad del solicitante, por ser dicha circunstancia puramente civil. Así pues, difícilmente puede tacharse de ilegal una Licencia de Obras cuando no es exigible para su concesión que la Administración la otorgue única y exclusivamente al propietario del inmueble correspondiente. Además, en el presente expediente, la solicitante de la licencia es una de las copropietarias, por lo que, sin prejuzgar otras circunstancias u otros derechos de terceros, tiene interés legítimo en la concesión de la referida licencia.

TRES.- En la tercera de las alegaciones del recurrente, por éste se solicita de manera "inmediata y fulminante" la paralización de las obras que está realizando D.^a María del Carmen Rodríguez Molina, en el inmueble objeto de este expediente. A este respecto, debe comentarse que no puede esta Administración ir contra sus propios actos sin la tramitación del procedimiento especial de revisión establecido para ello, y además, porque la actuación de la Sra. Rodríguez Molina no contraviene normativa urbanística alguna, no añadiéndose por el recurrente ningún indicio que pueda permitir la revisión administrativa de la licencia de obras otorgada.

Acaba el recurrente este tercer punto de sus alegaciones con la siguiente amenaza: "...además

de sacar a la luz pública este asunto de presuntas actuaciones parciales, contraviniendo Reglamentos, Leyes, Ordenanzas e incluso los informes de sus propios técnicos". Si bien es cierto que cualquier interesado en un expediente puede presentar las alegaciones que mejor defiendan sus intereses, éstas deben desarrollarse dentro del marco jurídico definido por la normativa aplicable y con las mínimas reglas de cortesía administrativa. Dentro del marco jurídico en el que se mueve este expediente, ni el recurrente ha presentado, ni esta Administración ha encontrado, precepto alguno que permita tachar de ilegal las actuaciones recurridas, por lo que ni bajo la amenaza o coacción del "escamio" público podremos apartarnos de la más estricta legalidad que hasta ahora ha guiado las órdenes de esta Consejería, aunque no se adapten a los intereses de una de las partes del expediente, entre quienes existe patente discrepancias, unos partidarios de la declaración de ruina y otros de la rehabilitación integral del edificio.

CUATRO.- En cuanto a las alegaciones presentadas por D.^a Magdalena Rodríguez Machado en su escrito de 8/11/02, deben aclararse las bases sobre las que ha girado, en todo momento, la actuación de esta Consejería, y que son las siguientes:

Por Real Decreto n.º 2753/1986, de 5 de diciembre, se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, una zona de la ciudad de Melilla, en la que se encuentra el edificio objeto de este expediente. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, obliga a las Administraciones Públicas competentes territorial y funcionalmente con respecto a los Bienes de Interés Cultural, a adoptar las medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción.

A la vista de los intereses en conflicto, puestos de manifiesto en el expediente, la Administración debe adoptar sus resoluciones teniendo en cuenta los principios constitucionales que puedan ser de aplicación al caso concreto, como el artículo 46 y 47 de la Constitución Española, relativos a la protección y conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, y al derecho a una vivienda digna.